



Michael Aulestia Salazar
CONCEJAL METROPOLITANO DE QUITO

Oficio Nro. GADDMQ-DC-MRAS-2024-0203-O

Quito, D.M., 17 de abril de 2024

Asunto: Iniciativa legislativa Proyecto de ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA AL TITULO VI, LIBRO IV.3, (REFORMADA POR LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 019-2020 DE 05 DE ENERO DE 2021) DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 001 DE 29 DE MARZO DE 2019 QUE CONTIENE EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

Señora Doctora
Libia Fernanda Rivas Ordóñez
Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho

De mi consideración:

En nuestra calidad de Concejales Metropolitanos de Quito y en ejercicio de la facultad prevista en la letra b) del artículo 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, en concordancia a lo dispuesto en los artículos 67.55 y 67.56 de la **Ordenanza Metropolitana No.063-2023**, sancionada el 06 de noviembre de 2023, referente a la presentación de proyecto de ordenanza; y, requisitos de los proyectos de ordenanzas y técnica legislativa, respectivamente, presentamos la iniciativa legislativa para el tratamiento del proyecto de **ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA AL TITULO VI, LIBRO IV.3, (REFORMADA POR LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 019-2020 DE 05 DE ENERO DE 2021) DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 001 DE 29 DE MARZO DE 2019 QUE CONTIENE EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.**

Sírvase encontrar, como adjunto, el documento firmado electrónicamente, por los señores Concejales Metropolitanos: Michael Aulestia Salazar, Sandra Hidalgo, Cristina López y Ángel Vega; así como, el texto del Proyecto de Ordenanza referido.

Los anexos que conforman el expediente del Proyecto de Ordenanza, serán ingresados de manera física por gestión documental de la Secretaría General del Concejo Metropolitano.

Particular que comunicamos con el objeto de que se realice la verificación de los requisitos de ley y se comunique con su contenido a la Comisión de Desarrollo Parroquial para continuar con el trámite legal correspondiente.



Michael Aulestia Salazar
CONCEJAL METROPOLITANO DE QUITO

Oficio Nro. GADDMQ-DC-MRAS-2024-0203-O

Quito, D.M., 17 de abril de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Michael Romeo Aulestia Salazar
CONCEJAL METROPOLITANO
DESPACHO CONCEJAL AULESTIA SALAZAR MICHAEL ROMEO

Anexos:

- Of. Proy. Ord. Ref. CM. Parroquias (1)-signed-signed-signed-signed.pdf
- tivación económica y defensa de las tradiciones culturales de las parroquias rurales del DMQ..docx



Firmado electrónicamente por:
MICHAEL ROMEO
AULESTIA SALAZAR



Asunto: Iniciativa legislativa Proyecto de **ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA AL TITULO VI, LIBRO IV.3, (REFORMADA POR LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 019-2020 DE 05 DE ENERO DE 2021) DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 001 DE 29 DE MARZO DE 2019 QUE CONTIENE EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.**

Señora Doctora
Libia Fernanda Rivas Ordóñez
Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho

De mi consideración:

En nuestra calidad de Concejales Metropolitanos de Quito y en ejercicio de la facultad prevista en la letra b) del artículo 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, en concordancia a lo dispuesto en los artículos 67.55 y 67.56 de la **Ordenanza Metropolitana No.063-2023**, sancionada el 06 de noviembre de 2023, referente a la presentación de proyecto de ordenanza; y, requisitos de los proyectos de ordenanzas y técnica legislativa, respectivamente, presentamos la iniciativa legislativa para el tratamiento del proyecto de **ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA AL TITULO VI, LIBRO IV.3, (REFORMADA POR LA ORDENANA METROPOLITANA No. 019-2020 DE 05 DE ENERO DE 2021) DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 001 DE 29 DE MARZO DE 2019 QUE CONTIENE EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.**

Particular que comunicamos con el objeto de que se realice la verificación de los requisitos de ley y se comunique con su contenido a la Comisión de Desarrollo Parroquial para continuar con el trámite legal correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Firmado electrónicamente por:
MICHAEL ROMEO
AULESTIA SALAZAR

Sr. Michael Aulestia Salazar
CONCEJAL METROPOLITANO



Firmado electrónicamente por:
SANDRA VICTORIA DE
LAS MERCEDES
HIDALGO ESPINEL

Sra. Sandra Hidalgo
CONCEJALA METROPOLITANA



Firmado electrónicamente por:
MARIA CRISTINA
LOPEZ GOMEZ DE LA
TORRE

Sra. Cristina López
CONCEJALA METROPOLITANO



Firmado electrónicamente por:
ANGEL VEGA .

Sr. Ángel Vega
CONCEJAL METROPOLITANO

MAS/PASP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. **Reforma referente a las tradiciones, costumbres centenarias e identidad que son parte del patrimonio histórico-cultural de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito.**

El 18 de enero del año 2021, en la Edición Especial Nro. 1488 del Registro Oficial, se publicó la Ordenanza Metropolitana de Bienestar Animal en el Distrito Metropolitano de Quito, Sustitutiva del Título VI, del Libro IV.3 del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito (Ordenanza Nro. 019-2020).

El 7 de mayo de 2011, se llevó a cabo un referéndum-consulta popular en Ecuador. A través de este referéndum-consulta popular los ciudadanos acudieron a las urnas a expresarse sobre las diez preguntas planteadas por el ex Presidente de la República Rafael Correa. Las cinco primeras preguntas proponían enmiendas a la Constitución, por esta razón se trata de un referéndum. Los cinco restantes decidían asuntos de interés público y se enmarcan en lo que es una consulta popular.

La Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíba los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? Los resultados de esta pregunta no se presentan en forma nacional, sino en forma local, relacionados con el cantón correspondiente.

En el Suplemento del Registro Oficial No. 490, de miércoles 13 de julio de 2011, pág. 29, se publicaron los resultados para el Cantón Quito, en la Provincia de Pichincha:

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

TOTAL DE ELECTORES: 1.712.845

TOTAL DE SUFRAGANTES: 1.325.487

OPCIÓN	TOTAL	PORCENTAJE
SI	674.093	54.43%
NO	564.302	45.57%
TOTAL	1.238.395	100%
VOTOS BLANCOS		30.535
VOTOS NULOS		56.557

El pronunciamiento popular fue claro en prohibir los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal, razón por la cual, al NO tener impacto sobre las tradicionales corridas de toros populares en las

parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, se continuaron celebrando estos eventos, por cuanto no se sacrifica a los animales, a diferencia de la Feria Taurina Jesús del Gran Poder, feria esa sí, que quedó prohibida por mandato popular.

Sin embargo, nueve años después, a partir de la vigencia de la Ordenanza Metropolitana de Bienestar Animal en el Distrito Metropolitano de Quito No. 019-2020, de 05 de enero de 2021, Sustitutiva del Título VI, Libro IV.3, de la Ordenanza Metropolitana No. 001 de 29 de marzo de 2019 que contiene el Código Municipal para el Distrito Metropolitano De Quito, mal interpretando o haciendo una interpretación extensiva de los resultados de la consulta popular antes referida, se prohibió las corridas de toros populares en las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, que son parte y esencia del patrimonio histórico-cultural, tradiciones, costumbres centenarias e identidad de la ruralidad y de sus habitantes en las que no se sacrifica al animal; y, que nada tienen que ver con las corridas taurinas con muerte del animal que se realizaban en la Plaza de Toros Quito.

Los habitantes de las distintas parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, (no todas, porque algunas son prácticamente urbanas, por ejemplo, Calderón, Conocoto, Tumbaco), han manifestado su inconformidad por esta prohibición que atenta contra sus derechos y constituye a todas luces un atropello a la cultura popular.

Ante esta situación, gestores y actores culturales, asociaciones de “chagras”, autoridades parroquiales, en particular de la parroquia de Pintag, han presentado en mi despacho aportes para la construcción de este proyecto de ordenanza reformatoria. Uno de esos aportes es la relación histórica de autoría del ciudadano Rex Tipton Sisa Freire, Especialista Superior y Magister en Historia de América por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Quito; Doctor en Historia medieval, moderna, contemporánea y de América por la Universidad de Salamanca-España que, como **Anexo 1**, adjunto a Exposición de Motivos.

De la lectura de esta *“Relación Histórica y Discusión de la Tradición Chacarera en Pintag”* vendrá a conocimiento de las y los señores concejales del Distrito Metropolitano de Quito, *“la realidad que antecede a la actividad taurina y chacarera (...) y se permitan discutir, debatir y concertar acciones que posibiliten revivir esta actividad ancestral”*

Les invito a leer con detenimiento el anexo referido líneas arriba, antes del inicio del trámite de esta propuesta legislativa.

Desde tiempos de la colonia, en las parroquias rurales de Quito, se realizaban corridas de toros populares, en homenaje a los patronos de cada parroquia. Por ejemplo, en Pintag, se realizaban corridas de toros populares en homenaje a la Virgen del Rosario y a San Jerónimo que, si bien es cierto, son fiestas con tinte religioso, que se ha ido afianzado como

parte de las costumbres autóctonas de sus habitantes, convirtiéndose en tradiciones que han perdurado a través del tiempo. En honor de sus patronos, los parroquianos realizan misas, novenas y, hasta antes y después de la consulta popular de 2011, se realizaban las infaltables corridas de toros populares, constituyéndose en una tradición de los chagras del sector.

Esta tradición se remonta a 1590, cuando el propio Cabildo resolvió a favor de la realización de las corridas de toros populares, a tal punto que con recursos del Cabildo se proveía de los toros para las corridas, costumbre y tradición que se mantuvo desde la colonia, en la etapa de independencia y se mantuvo en la era republicana, como parte de las festividades religiosas arraigadas en la cultura mestiza de los quiteños.

Un elemento fundamental para el establecimiento de esta tradición centenaria, es la geografía de las parroquias rurales de Quito, rodeadas de páramos, grandes extensiones agrícolas, tierra propicia para la cría de ganado y la aparición de un personaje que se ha vuelto representativo de la cultura de las parroquias rurales de Quito, **el chagra**.

Chagras y habitantes de las parroquias rurales de Quito han mantenido viva las tradiciones de las fiestas patronales que tenían como atracción principal las corridas de toros populares, festejos que dinamizaban la economía de los parroquianos, el comercio, el turismo, y todas las actividades que giran alrededor de las fiestas populares. Ya en la plaza misma, se desarrollaban actividades que son propias del patrimonio cultural de nuestras parroquias, como los desfiles de colchas, botada de naranjas, la rama de gallos, acompañadas de la música entonada por prestigiosas bandas de pueblo y la deliciosa gastronomía de cada parroquia.

Todas estas tradiciones y costumbres son las que pretendemos recuperar con la expedición de este proyecto normativo, de tal manera que podamos devolver a los habitantes de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano el ejercicio pleno de los derechos que les han sido arrebatados por una mala interpretación de la ordenanza, por la mal intencionada lectura de los resultados de la consulta popular. En las corridas de toros populares no hay muerte del animal y, nada tiene que ver su crianza para las corridas de toros populares con el bienestar animal y con la regulación y control de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito.

Ya desde el objeto mismo de la Ordenanza No. 019-2020, encontramos una enorme contradicción, pues si bien está encaminada a regular y controlar la fauna urbana, señala en el mismo artículo que la fauna urbana es una terminología global que conforma el Distrito Metropolitano de Quito, desconociendo que el territorio del Distrito se compone de territorio urbano y el territorio de las 33 parroquias rurales, que tienen espacios urbanos, como sus cabeceras parroquiales, pero que tiene

particularidades y en sus jurisdicciones se mantienen vivas costumbres y tradiciones ancestrales que no conviven con lo urbano sino que son parte de la cotidianidad y la vida misma de chagra, del parroquiano, del que convive con el toro, que es motor y centro de su economía, de su identidad.

Ahora bien, hay que destacar que en la ordenanza que pretendemos reformar, no hay disposición expresa que prohíba las corridas de toros populares en las parroquias rurales, de tal manera que las entidades de control metropolitanas no alcanzan a entender sus propias competencias frente a eventos de esta naturaleza. Lo que hay es una interpretación de la normativa por parte de estas entidades de control. Prohibido esta, de manera expresa, las corridas de toros con muerte del animal, pero no en la ordenanza en ciernes, sino como resultado de la pregunta 8 de la consulta popular de mayo de 2011, a la cual no nos oponemos y que, como demócratas que somos, aceptamos el mandato del soberano expresado en las urnas.

La Ordenanza 019-202 de Bienestar Animal en el Distrito Metropolitano de Quito no aborda las actividades agrícolas y agropecuarias que los habitantes de las parroquias rurales realizan cotidianamente con el apoyo de animales. Por ejemplo, si nos ceñimos de manera literal a las disposiciones de la Ordenanza, los parroquianos no podrían por ejemplo ordeñar vacas para comercializar la leche como sustento económico de sus familias, porque para hacerlo hay que atar sus extremidades posteriores. ¿Esta acción sobre estos animales, se debe considerar como maltrato animal? Vamos más allá, los chagras que montan caballo para arrear el ganado en los páramos, tienen que, por seguridad ajustar la cincha de la montura al lomo del caballo, y tienen un freno en el hocico del animal con el que, por medio de las riendas se da dirección al caballo. ¿Esto también cae en el campo de maltrato animal?

Estos dos casos que he mencionado, a manera de ejemplo, de ninguna manera constituyen maltrato al animal, porque pese a hacerlos a plena conciencia, no tiene como finalidad infringir en ellos dolor, maltrato, afectación psicológica, sino que es parte de las actividades propias que realizan los habitantes de la ruralidad.

Decíamos, líneas arriba, que las dependencias y los funcionarios de las entidades municipales, sin tener norma expresa, han prohibido la realización de las corridas de toros populares, haciendo una interpretación del resultado de la Consulta Popular de 2011, donde se prohíbe la muerte del animal, a diferencia de la Feria Taurina Jesús del Gran Poder que se celebraba al inicio del mes de diciembre de cada año, con ocasión del aniversario de la Fundación Española de San Francisco de Quito. Tal es así que, en otros cantones de la provincia de Pichincha, se realizan corridas de toros populares sin ninguna prohibición, como parte de las festividades de la ruralidad.

Los toros que participan de las corridas populares, luego del festejo salen ilesos y los ganaderos parroquianos los devuelven a su hábitat natural, por lo que consideramos, por decir lo menos, desproporcionado enmarcar a las corridas de toros populares de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, como actos de maltrato animal y que van contra normativa del bienestar animal que desarrolla la Ordenanza 019-2020.

Las corridas de toros populares en las parroquias son el centro de los festejos rurales, alrededor de las cuales se realizan otros eventos tradicionales, por decir algunos, el palo encebado, los desfiles de colchas, las botadas de naranjas y caramelos, siempre acompañados de las bandas de pueblo, y lo que es más importante, estos festejos contribuyen a la buena convivencia de los vecinos, el reencuentro de los parroquianos que han emigrado a la ciudad y fuera del país y que regresan a su terruño con ocasión de las festividades.

Esto último, ha sido, durante mucho tiempo, fuente de empleo, de dinamización de la economía de las parroquias, del turismo, que se ha visto afectado por la prohibición de las corridas de toros populares. Pierden los ganaderos, pierden las personas que se dedican a la elaboración de las colchas, los vecinos que en esas fechas ofrecen alojamiento, las asociaciones gastronómicas, los que atienden en restaurantes y tienen empleo por temporada, los talabarteros, los transportistas, emprendedores que aprovechan las festividades para promocionar productos y ofrecen bienes y servicios, comerciantes, etc., etc. No se ha cuantificado las pérdidas económicas en las parroquias rurales del DMQ, pero es evidente que han sufrido una fuerte depresión como consecuencia de esta prohibición, y no solo es en el sentido económico, también es una afectación directa a sus costumbres y tradiciones, a su identidad cultural, a su idiosincrasia.

Solo para el análisis de las señoras y señores concejales, me permito preguntar: ¿puede la normativa de bienestar animal afectar, de la manera referida en la exposición de motivos, la identidad cultural de las parroquias rurales de Quito? Basta comparar lo que sucede en cantones vecinos, por poner un ejemplo, en el cantón Mejía, el Paseo procesional del Chagra es considerado patrimonio cultural intangible del país, ¿y la misma costumbre y tradición de los Chagras de nuestras parroquias rurales?

Hasta aquí la exposición de motivos en lo referente a la reforma relacionada a recuperar las tradiciones y costumbres ancestrales en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito.

II. Reforma para salvaguardar sector productivo y fuentes de empleo.

• Antecedentes:

Ante la expedición y publicación en la Edición Especial Nro. 1488 del Registro Oficial, de 18 de enero del año 2021, de la Ordenanza

Metropolitana de Bienestar Animal en el Distrito Metropolitano de Quito, Sustitutiva del Título VI, del Libro IV.3 del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito (Ordenanza Nro. 019-2020), miembros del sector productivo del Distrito Metropolitano de Quito han expresado su total desacuerdo por las graves afectaciones que produjo para los diferentes actores de esta importante cadena productiva que, afectando a las ventas anuales en el Distrito Metropolitano de Quito y que genera miles de fuentes de empleo directas e indirectas.

Con el objetivo de salvaguardar los legítimos intereses de este importante sector y proteger los miles de fuentes de empleo formal que generan, presentamos el presente proyecto de Ordenanza Metropolitana Reformatoria al Título VI, Libro IV.3, (Reformada por la Ordenanza Metropolitana No. 019-2020 de 05 de enero de 2021) de la Ordenanza Metropolitana No. 001 de 29 de marzo de 2019 que contiene el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, en el sentido que se eliminen del Código Municipal las disposiciones y prohibiciones contenidas en la Sección XII De los Animales Destinados al Consumo, del Capítulo II De la Protección de la Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, del Título VI Del Bienestar Animal, artículos 3678, 3679, 3680 y 3681; y no solamente porque son ilegales y antitécnicas, sino que también son inaplicables.

- **El Mito:**

Diversos grupos animalistas han tratado de persuadir la opinión pública y a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, con una retórica falsa que sugiere que el sector productivo no aplica prácticas de bienestar animal en sus procesos de producción, y que utiliza a los animales como simples máquinas de producción de alimentos.

- **La Verdad:**

El sector productivo está en la obligación formal de cumplir con los más altos estándares de bienestar animal establecidos en normas nacionales (Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y su Reglamento General de Aplicación; Guía de buenas prácticas agropecuarias emitida por AGROCALIDAD; reglamentos técnicos que norman la crianza, transporte, faenamamiento y comercialización de animales), e internacionales (Código de animales terrestres, recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal- OMSA, etc.). Un animal maltratado o sometido a altos niveles de estrés NO ES PRODUCTIVO y no cumple con los objetivos empresariales de quienes se dedican a la producción y comercialización de proteína de origen animal.

El bienestar animal es un concepto técnico, amplio y complejo que debe ser analizado y entendido desde una visión objetiva, fundamentada en estudios científicos y no desde criterios empíricos u opiniones subjetivas.

- **Consideraciones Constitucionales:**

Derecho Constitucional a la Participación Ciudadana:

La construcción de la Ordenanza Nro. 019-2020, aprobada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se la habría realizado contrariando lo dispuesto en el artículo 85 de nuestra Constitución, que promueve y garantiza la participación de todas las personas en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas; sin embargo, a pesar de haber contado con la participación de 26 acreditados al mecanismo de silla vacía, solamente incluyó una sola visión y postura sobre el tema; es decir, no contó con una efectiva participación de actores especializados en materia de sanidad agropecuaria, quienes pudieron haber aportado con sus conocimientos técnicos y científicos, y advertir sobre las consecuencias negativas para la producción, con la incorporación de ciertas disposiciones anti técnicas y que no guardan armonía con normas y recomendaciones de carácter nacional e internacional.

La no participación de importantes sectores se debió al desconocimiento de que, dentro de un cuerpo normativo que en principio fue concebido para regular animales de compañía (perros y gatos), incluyó, con posterioridad, todo un capítulo que contendría disposiciones relativas a animales de consumo. Esta afirmación podrá evidenciarse en el informe de la Procuraduría Metropolitana contenido en el Oficio Nro. GADDMQ-PM-2021-0471-O, de 04 de febrero de 2021, en cuyo párrafo 35 se señala textualmente: *“35. En adición, se ha de considerar que, las disposiciones constantes en el texto del proyecto de ordenanza (Ordenanza Nro. 019-2020) adjunto al oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2019-1907-O, contenía su Sección IX del Capítulo III, reglas y prohibiciones en relación a los animales de consumo, distintas y diversas de las aprobadas en segundo debate por el Concejo Metropolitano;”*.

El sector productivo, ya en conocimiento de la expedición de la referida Ordenanza Metropolitana, ha manifestado expresamente su preocupación por no haber sido considerados en el proceso de construcción normativa, lo que desencadenó en la aprobación de un cuerpo legal anti técnico, descoordinado entre niveles de gobierno, y cuyas imprecisiones ponen en riesgo el ejercicio de una actividad económica que representa más de tres mil millones de dólares anuales en ventas y genera miles de fuentes de empleo a nivel nacional.

Así, tenemos que el hecho de que hayan participado 26 organizaciones (con una sola postura) en el proceso de construcción de la ordenanza, no puede entenderse que este fue un ejercicio participativo que consideró las posturas de los diferentes actores involucrados. Era de esperarse que, si lo que se pretendía era regular una actividad productiva (como en efecto se hizo), se convoque a los diversos actores que directa e indirectamente serían afectados con la promulgación de una normativa

de esta índole. En este caso puntual se desarrolló una ordenanza con una visión animalista sin considerar aspectos técnicos, económicos, sociales, culturales, soberanía alimentaria, etc.

La política pública debe ser construida de forma participativa, plural, integral, con un sentido de realidad nacional y de las limitaciones de nuestra economía, considerando siempre el derecho del consumidor a elegir, pero principalmente de las familias a acceder a alimentos saludables y asequibles.

Prevalencia de los Tratados Internacionales:

Por otro lado, el artículo 425 de la Constitución establece el orden jerárquico de aplicación de las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico, ubicándolas así: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; **las ordenanzas**; los acuerdos y las resoluciones; y, los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

En esa misma línea, el artículo 261 numeral 9 de la Constitución establece que es competencia exclusiva del Estado central ejercer las competencias que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales; entre otros instrumentos suscritos por el Ecuador tenemos el Tratado de la Organización Mundial de Comercio OMC (Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias); Convención Internacional de Protección Fitosanitaria -CIPF-; Código Sanitario de los Animales Terrestres de la -OIE -Organización Mundial de Sanidad Animal (ahora OMSA); Acuerdo de Cartagena que dio origen a la Comunidad Andina de Naciones -CAN; y, otros convenios internacionales sobre esta materia.

Así, tenemos que la Constitución de la República reconoce a los tratados internacionales ratificados por el Ecuador y les otorga una jerarquía superior a las ordenanzas municipales, otorgando la facultad exclusiva al Estado Central para ejercer las competencias que de éstos se deriven.

En esta virtud, la Organización Mundial de Sanidad Animal reconoce como miembro al Ecuador, representado a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Código de Animales Terrestres establece en su glosario de términos que la Autoridad competente es la autoridad veterinaria o cualquier otra autoridad de un País Miembro que tiene la responsabilidad y la capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de protección de la sanidad y el bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de certificación veterinaria y las demás normas y recomendaciones del Código Terrestre y del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE en todo el territorio del país.

En este sentido, la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria (LOSA) establece que a la Agencia de Control y Regulación Fito y Zoonosanitario-AGROCALIDAD, le corresponde, entre otras atribuciones, la regulación y control de la sanidad y bienestar animal a nivel nacional, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 143 del Código Orgánico del Ambiente (CODA), que señala que para el manejo de la fauna urbana se deberá considerar, entre otros, los lineamientos y normas técnicas emitidas por la Autoridad Agraria Nacional en lo que respecta al bienestar de los animales destinados al consumo.

No obstante lo anterior, a decir de sus representantes, la participación de AGROCALIDAD en el proceso legislativo de formulación de la Ordenanza, fue requerida para temas puntuales distintos a los que finalmente fueron aprobados por el Concejo Metropolitano, habiéndose vulnerado así, el principio de coordinación que rige a las administraciones públicas.¹ Este particular devino en la promulgación de un cuerpo normativo desarticulado, confuso y que, como se explicará más adelante, duplica competencias previstas en una ley orgánica para otro nivel de gobierno.

- **Prohibición de un doble régimen sancionatorio:**

Advertimos que el Capítulo VI de la Ordenanza Nro. 019-2020 “Del Procedimiento Administrativo Sancionador” establece, en su Sección IV “De las infracciones y sanciones”, las consecuencias jurídicas para quienes incurran en las prohibiciones o incumplan con las disposiciones contenidas en dicha sección, asignándole a la Agencia Metropolitana de Control- AMC, la facultad para instaurar el trámite para la aplicación de las sanciones a los presuntos infractores.²

Al respecto, la administración municipal no puede desconocer que la LOSA, norma nacional de jerarquía superior a las ordenanzas metropolitanas, determina, en su artículo 48, que AGROCALIDAD ejercerá el control zoonosanitario y de bienestar animal, de las unidades de explotación, transporte, comercialización de animales y mercancías pecuarias. De igual forma, el Título VI ibidem “Del régimen administrativo” establece las infracciones y sanciones que se derivan del incumplimiento y transgresión de las disposiciones en materia de sanidad agropecuaria contenidas en la Ley, confiriéndole a la Agencia la facultad sancionatoria en sede administrativa a nivel nacional.³

¹ Código Orgánico Administrativo- COA-Art. 9.- **Principio de coordinación.** Las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones.

² Ordenanza Metropolitana Nro. 019-2020 **Artículo 109.-Del Procedimiento Administrativo Sancionador.** Los procedimientos administrativos sancionadores por el cometimiento de una infracción contra el bienestar animal de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito se establecerán de conformidad con la normativa legal nacional y metropolitana vigente, a través de la Agencia Metropolitana de Control, entidad que procederá a instaurar el trámite correspondiente para la aplicación de las sanciones a los presuntos infractores.

³ Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria- LOSA Art. 66.- **De la jurisdicción y competencia administrativa.**- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario tendrá la competencia y jurisdicción para conocer y resolver en el territorio nacional, en la vía administrativa, las solicitudes, reclamos, recursos o cualquier otra acción administrativa que interpusieren los administrados cuando se sintieren afectados por un acto o hecho administrativo, que derive de la aplicación de la presente Ley.- La Agencia, en ejercicio

Lo anterior se constituye como un doble régimen sancionador, que vulnera el principio de seguridad jurídica y una de las garantías constitucionales básicas del debido proceso: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia”⁴; consecuentemente, además de crear una carga adicional de requisitos administrativos, se genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza para las personas y empresas sujetas al control por parte de AGROCALIDAD, quienes con la aplicación de la Ordenanza 019-2020, también estarán sujetas al control del Municipio de Quito.

- **Pronunciamiento de la Corte Constitucional:**

- i. Sentencia de la Corte Constitucional No. 253-20-Jh/22 (Caso Mona Estrellita):**

La Sentencia de la Corte Constitucional No. 253-20-JH/22 (Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos) Caso “Mona Estrellita” establece que la Constitución del Ecuador reconoce como sujetos de derecho no solo a personas naturales y jurídicas individualizadas, sino también, a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano, al pueblo montubio, a las comunas, y a la Naturaleza.

En el caso de los animales, señala que son aquellos sujetos de derechos distintos a las personas que no pueden equipararse a los seres humanos, ya que su naturaleza y esencia no es plenamente compatible con la de aquellos, lo cual no significa que no sean sujetos de derechos, sino que implica que sus **derechos sean observados como una dimensión específica -con sus propias particularidades- de los derechos de la Naturaleza.**

Coincidimos con el sector productivo en la afirmación de que los animales son sujetos de derechos; y, por tal razón, sus procesos cumplen con las normas técnicas de bienestar de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario- AGROCALIDAD que, a su vez, fundamenta sus regulaciones en las recomendaciones de la Organización Internacional de Sanidad Animal- OMSA. Además, se ha demostrado científicamente que un animal maltratado o estresado no es productivo.

La Corte Constitucional determina que el ser humano es un depredador, y al ser omnívoro por naturaleza, mata a su presa en cumplimiento de la cadena trófica, lo que implica que no violenta de forma «ilegítima» el derecho a la vida de un animal. Asimismo, en el párrafo 103 concluye que **la alimentación, además de ser una condición biológica del ser humano, movida por el principio intrínseco de supervivencia, es un**

de la potestad estatal, tendrá, además, la facultad sancionatoria, en sede administrativa, respecto de las infracciones que expresamente se determinan en esta normativa.

⁴ Constitución de la República del Ecuador **Art. 76.-** En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...)i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.(...)'.

derecho consagrado en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Lo anterior ameritó que la Corte destine una sección de la sentencia para analizar las interacciones del ser humano con los animales (Sección 5.1.5.1) en la que establece que, en general, el ser humano ha utilizado técnicas como la agricultura, la cría de animales, la pesca, la caza, la recolección y la silvicultura para asegurarse la provisión de fuentes nutritivas.

Los magistrados señalaron que este tipo de actividades son legítimas, y traducen formas históricas y mantenidas de interacción de la especie humana con el resto de especies animales; y, responde a mecanismos que el ser humano ha venido desarrollando y consolidando para asegurar su propia supervivencia como una especie heterótrofa que carece de la capacidad para producir sus propios nutrientes. Párrafo 108.

Más adelante, la Corte Constitucional reconoce que todas las actividades antedichas podrían enmarcarse, dependiendo de las particularidades de cada caso, dentro del derecho garantizado por el artículo 74 de la Constitución⁵, y así configuran formas mediante las cuales las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades ejercen su derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

ii. Voto Salvado Dra. Carmen Corral Ponce:

En su voto salvado, la Dra. Carmen Corral realiza ciertas aclaraciones por las cuales no concuerda con la sentencia aprobada por los demás magistrados de la Corte Constitucional:

“6. Los animales no tienen derecho a la identidad como para que este Organismo pueda sostener que se reconoce el nombre de la mona chorongo “Estrellita”, que dicho sea de paso fue atribuido por una persona que se percibe y denomina a sí misma como su “madre”.

*7. La Constitución en el numeral 28 del artículo 66 dispone: “Se reconoce y garantizará **a las personas**: (...) El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos” (énfasis agregado). Nuestra Constitución reconoce el derecho a la identidad **exclusivamente de las personas** y, entre otros, el atributo del nombre.*

26. La categoría de seres sintientes es una condición científica y fáctica asociada a las funciones nerviosas, neurológicas y sensoriales de los animales, asimilable al concepto de seres

⁵ Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. (...)

vivientes que aplica a otros componentes de la naturaleza, por lo que este razonamiento no basta para atribuir a un individuo de la especie animal el “grado de persona” y con ello la titularidad de ejercicio de la garantía jurisdiccional del hábeas corpus. Resulta irrazonable que a partir de un elemento tan subjetivo como la “sintiencia”; término, por cierto, reconocido por teorías de la ética animal, mas no por la Real Academia Española de la Lengua, se pretenda desconocer la literalidad del texto constitucional y equiparar -como se ha hecho en este caso- al bienestar animal con la integridad personal.

29. *No es factible la interposición de una acción de hábeas corpus para recuperar la tenencia o solicitar la reinserción a su hábitat de un espécimen de fauna silvestre, en virtud de que nuestro ordenamiento jurídico ha dotado a las instancias administrativas y judiciales de otros mecanismos para tutelar el bienestar animal. **El precedente constitucional que se sienta, podría ser la base para que en el futuro se interponga hábeas corpus en favor de animales silvestres mantenidos en cautiverio en un zoológico, o vacunos retenidos en un camal para su faenamiento, o un canario en la jaula de alguna vivienda, situaciones que resultarían absurdas, a pesar de que la sentencia se refiera tangencialmente a estos aspectos, como constitucionales.***

49. *El reconocimiento constitucional a los derechos de la naturaleza, que de acuerdo a la sentencia de mayoría incluye a los animales como sujetos de derechos, **no puede desnaturalizar la interacción de éstos con el ser humano.** En ese contexto, los procesos de domesticación de animales para compañía o trabajo, su crianza para faenamiento y alimentación, su cautiverio para protección de especies, investigación científica y educación, y otros tipos de interacción que las distintas sociedades han desarrollado con los animales a través del tiempo, no pueden ser trastocados por un fallo judicial.”*

- **Pronunciamientos y Dictámenes de Entidades Públicas Relacionadas:**

- i. **AGROCALIDAD:**

Oficio Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2022-000707-OF de 08 de julio de 2022, mediante el cual AGROCALIDAD formuló, ante la Procuraduría General del Estado, una consulta respecto a qué entidad le corresponde ejercer la competencia de aplicar las medidas de protección de la sanidad y el bienestar de los animales.

Mediante el Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAJ-2022-000482-M de 07 de julio de 2022, que contiene el criterio jurídico de AGROCALIDAD establece:

- “La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria se promulgo en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 (...)

(...) esta norma creo o institucionalizo (sic.) a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario como una institución encargada de la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoonosanitario de la producción agropecuaria.

En el mencionado cuerpo legal establecen claramente cuáles son las competencias y atribuciones que tiene la Agencia siendo esta la más relevante en el ámbito que nos compete la de dictar regulaciones técnicas en materia fito, zoonosanitaria y bienestar animal. (El énfasis fuera de contexto)

- “[l]a Organización Mundial de Sanidad Animal reconoce como miembro al Ecuador **representado a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería,** es así que el Código terrestre establece en su glosario de términos que la Autoridad competente es designa (sic.) la autoridad veterinaria o cualquier otra autoridad de un País Miembro que tiene la responsabilidad y la **capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de protección de la sanidad y el bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de certificación veterinaria y las demás normas y recomendaciones del Código Terrestre y del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE en todo el territorio del país.** (...)”

Es así que se realiza un análisis del Código Orgánico Ambiental claramente en su artículo 139 indica que: “El presente capítulo tiene por objeto la promoción y la garantía del bienestar animal, a través de erradicar la violencia contra los animales, fomentar un trato adecuado para evitarles sufrimientos innecesarios y prevenir su maltrato, **y de aplicar y respetar los protocolos y estándares derivados de instrumentos internacionales reconocidos por el Estado**”. (lo subrayado fuera de texto). Y en su artículo 144 establece que: “**Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos** contarán con las atribuciones de planificación, regulación, control, gestión y **coordinación con los entes rectores competentes en los ámbitos de salud, investigación, educación, ambiente y agricultura,** de conformidad

con las disposiciones de este Código y la ley”. (de igual forma lo subrayado fuera del texto).

- **“Por lo tanto, al determinar claramente que *los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos para efectuar la regulación, control, gestión deben coordinar con los entes rectores competentes en el ámbito de agricultura.*”**
- **En tal virtud, es criterio jurídico de esta Dirección General que la única autoridad competente reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal para aplicar las medidas de protección de la sanidad y el bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de certificación veterinaria y las demás normas y recomendaciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres, es la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario, por lo tanto, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos deben coordinar con nuestra institución para dar cumplimiento con lo establecido en el Código Orgánico Ambiental, esto también con el fin de dar cumplimiento a los principios de eficacia y coordinación establecidos en el Código Orgánico Administrativo con la finalidad de evitar doble control y regulación en el mismo ámbito.”** (Las negritas fuera de contexto).

ii. Ministerio de Salud Pública:

Mediante Memorando Nro. MSP-CGAJ-2022-0407-M de 27 de julio de 2022, la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública dio atención al requerimiento contenido en el Oficio No.19430, de 13 de julio de 2022, a través del cual la Directora Nacional de Consultoría de la Procuraduría General del Estado, solicitó al Ministro de Salud Pública que se emita criterio jurídico, a fin de contar con elementos de juicio necesarios para atender el requerimiento presentado por el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario.

El Criterio de la Coordinación Jurídica señaló lo siguiente:

- **“Con mérito en la base jurídica invocada y el análisis realizado, a criterio de esta Coordinación General de Asesoría Jurídica, *la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria en el artículo 13, literales a) y x) a los que se refiere el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario en su consulta, otorgan a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario atribuciones de regulación y control en materia fito, zoonosanitaria y bienestar animal, sin que dichas disposiciones atribuyan a otra instancia el ejercicio de las***

mismas, a fin de que distinto organismo esté facultado para ejercerlas de manera paralela.

En cuanto a las implicaciones legales que la falta de coordinación previa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario, para ejercer sus atribuciones de planificación, regulación, control, gestión en materia de bienestar animal, el marco jurídico vigente no prevé implicación expresa al respecto; sin embargo, es preciso mencionar que **el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía- COOTAD, en el artículo 3, prevé los principios que rigen el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, señalando entre éstos el de coordinación y corresponsabilidad. Así como también es de considerar la necesidad de que las actuaciones de la Administración Pública eviten duplicidades y omisiones que como consecuencia pudieran presentarse. (...)** (El énfasis nos corresponde).

iii. Asociación De Municipalidades Ecuatorianas- Ame:

Mediante oficio No. AME-DNAJ-2022-056-O de 09 de agosto de 2022, en atención al oficio N° 19624 de 28 de julio de 2022, por el cual la Directora Nacional de Consultoría de la Procuraduría General del Estado solicitó a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas el criterio jurídico institucional relativo a las consultas formuladas por el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario. Al respecto, el Director Nacional de Asesoría Jurídica (e) se manifestó en los siguientes términos:

“Es inevitable dentro de un modelo de Estado descentralizado que cada nivel de gobierno ejerza sus competencias exclusivas, sin pretender que otro nivel de gobierno lo efectúe, siendo propio y privativo el ejercicio de las competencias exclusivas; por tanto, en ejercicio de las competencias exclusivas y por mandato del art. 261.9 de la Constitución de la República, le corresponde al Estado central la regulación y control Fito y Zoonosanitario en aplicación de las medidas de protección de la sanidad y el bienestar de los animales por ser parte de sus competencias exclusivas; y, aplicar los tratados internacionales, como el de la Organización Mundial de Comercio OMC (Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria -CIPF- y el Código Sanitario de los Animales Terrestres de la -OIE -Organización Mundial de Sanidad Animal; así como el Acuerdo de Cartagena que dio

origen a la Comunidad Andina de Naciones -CAN- y otros Convenios internacionales sobre esta materia fito, Zoosanitario y de bienestar animal.” (El énfasis nos corresponde).

iv. Ministerio Del Ambiente:

Mediante Memorando Nro. MAATE-CGAJ-2022-1263-M de 16 de agosto de 2022, en atención al Oficio No. 19623 de 28 de julio de 2022 a través del cual la Procuraduría General del Estado, solicitó a esta Cartera de Estado, el criterio jurídico del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en relación a las consultas formuladas por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, se emitió el siguiente pronunciamiento:

- *“[e]sta dependencia establece que **las competencias dadas a la Agencia son en exclusiva, respecto de lo relacionado a la producción agropecuaria y bienestar animal en toda la cadena de producción, es decir, producción vegetal y animal, su explotación y aprovechamiento, desde la provisión de estos, pasando por la producción, transformación hasta su comercialización.**”*
- *“**A demás (sic.), dentro de la Organización Mundial de Sanidad Animal, como parte de sus miembros se encuentra el Ecuador representado por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, dicha Organización expidió el Código Sanitario para los Animales Terrestres mismo que “establece las normas para mejorar la sanidad y el bienestar de los animales y la salud pública veterinaria en el mundo”,** además señala que sus “Miembros deberán remitirse a estas normas a la hora de establecer medidas para la prevención, detección temprana, notificación y control de los agentes patógenos en los animales terrestres (mamíferos, aves, reptiles y abejas), incluyendo los agentes zoonóticos. La implementación de las recomendaciones del Código Terrestre garantiza la seguridad del comercio internacional de animales y de productos derivados, evitando la instauración de barreras comerciales injustificadas.”*
- *“[A]l respecto es menester señalar que **nuestra legislación está plenamente dotada de diferentes principios que rigen la Administración Pública, principios constitucionales y legales de obligatorio cumplimiento para la Administración, entre estos, el principio de Coordinación y el principio de Colaboración,** los mismos que permitirán acordar mecanismos para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos.”*

En razón de lo señalado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos se encuentran obligados en atención a la Norma Suprema y la Ley a coordinar con las Autoridades Nacionales en salud, investigación, educación, ambiente y agricultura para la efectiva ejecución de sus atribuciones, por lo que deberán poner más atención en el cumplimiento de los principios que rigen la Administración Pública, limitándose a las competencias atribuidas a cada entidad.

*Finalmente, me permito señalar que no existe una medida coercitiva para el no cumplimiento de dichos principios, sin embargo (sic.) **es obligación de todos los niveles de Gobierno, la observancia y cumplimiento de la Constitución y la Ley.***” (El énfasis me corresponde).

v. Consejo Nacional de Competencias- CNC:

Mediante oficio Nro. CNC-CNC-2023-2724-OF de 17 de noviembre de 2023, en atención al oficio Nro. AGR-AGROCALIDAD/DE-2023-001334-OF de 30 de octubre de 2023, suscrito por el Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, en calidad Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario, el Secretario Ejecutivo del CNC emitió su criterio respecto a las competencias sectoriales de regulación y control sanitarias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales y Metropolitanos y de Autoridad Agraria Nacional, en los siguientes términos:

- *De acuerdo con lo previsto en Constitución de la República del Ecuador, **el Estado Central tiene como competencia exclusiva aquellas que corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales, incluidos aquellos que regulan las medidas sanitarias y fitosanitarias.***
- ***El manejo de la fauna urbana se encuentra regulado en el Código Orgánico del Ambiente, dentro del cual reconoce como rector al Gobierno Central, y cuyos lineamientos y normas técnicas deben ser considerados para su ejercicio.** Entre las cuales se encuentra aquellas “emitidas por el Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca sobre el bienestar de los animales destinados al consumo, en toda la cadena de producción”.*
- ***Acorde a lo señalado en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario, es la entidad competente de controlar y regular la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos de la producción primaria,** entre cuyas funciones se encuentra: Dictar regulaciones técnicas en materia fito, zoonosanitaria y bienestar animal; Controlar el cumplimiento de regulaciones técnicas en materia fito, zoonosanitarias y de bienestar animal en toda la cadena de*

producción; Reglamentar y controlar los estándares de bienestar animal en las explotaciones productivas pecuarias industriales destinadas al mercado de consumo, mismos que deberán estar acorde a la previsto en la Ley de la materia y en los instrumentos internacionales.

- *Con base en las facultades previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el marco de la referida competencia, **le corresponde a los GAD municipales o metropolitanos, crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana, que garanticen el bienestar animal.***
 - *Adicional a lo cual, el Código Orgánico del Ambiente reconoce como facultades de los referidos niveles de gobierno, regular y controlar el manejo de fauna urbana, **de manera coordinada con el ente de control nacional, y dentro del marco de las políticas y regulaciones expedidas por éste.***
 - *Es obligación de todos los Gobiernos Autónomos descentralizados trabajar de **manera articulada y complementaria para el ejercicio de la referida competencia, cuya rectoría le corresponde al Gobierno Central.**” (El énfasis nos corresponde).*
- **Criterio Vinculante y Obligatorio del Procurador General del Estado respecto a las Competencias Sobre la Regulación y Control de la Sanidad y Bienestar Animal:**

Con base en los pronunciamientos de las entidades públicas referidas en al apartado anterior, el Procurador General del Estado, mediante Oficio No 20196 de 07 de septiembre de 2022, emitió su pronunciamiento ante la consulta formulada por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario- AGROCALIDAD cuyo objeto era esclarecer el régimen de competencias respecto a la sanidad y bienestar animal.

Conforme el literal f) del artículo 3, en concordancia con el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, al Procurador General le corresponde: “f) Absolver, consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas “constitucionales”, legales o de otro orden jurídico. **El pronunciamiento será obligatorio para la Administración Pública, sobre la materia consultada, en los términos que se indican en esta ley**”. (El énfasis me corresponde).

1. “[L]a Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario **es el único ente nacional encargado de la regulación y control de la sanidad y bienestar animal**, sanidad vegetal y la inocuidad

de los alimentos en la producción primaria en el país, al que corresponde aplicar las medidas de protección de sanidad y el bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de certificación veterinaria y demás normas y recomendaciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres, así como dictar regulaciones técnicas en materia Fito, zoosanitaria y bienestar animal, además de controlar el cumplimiento de regulaciones técnicas.”

2. “[d]e acuerdo con lo previsto en los artículos artículo 144 numeral 1 del Código Orgánico Ambiental; 3 letra c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 14 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, el deber de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos de **coordinar con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario la gestión de competencias en materia de bienestar animal se instrumenta en la elaboración del informe preceptivo** al que se refiere el numeral 1 del artículo 144 del Código Orgánico del Ambiente.” (El énfasis fuera de contexto).

Si bien es cierto, el criterio del Procurador General del Estado, contenido en el Oficio No. 20196, fue emitido con posterioridad a la sanción de la Ordenanza Metropolitana No. 019-2020, El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito no puede desconocer su carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. En tal virtud, el Concejo Metropolitano de Quito se encuentra en la obligación de reformar la ordenanza y acoplarla, de manera tal, que guarde armonía con el ordenamiento jurídico vigente y a los tratados internacionales ratificados por el Ecuador.

Además de las consideraciones de orden legal expresadas en esta exposición de motivos, es importante tomar en cuenta que, de no lograrse un proceso de revisión técnico y oportuno del Código Municipal, en particular el contenido en el TITULO VI, LIBRO IV.3, (Reformada por la Ordenanza Metropolitana No. 019-2020 de 05 de enero de 2021) de la Ordenanza Metropolitana No. 001 de 29 de marzo de 2019 que contiene el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, que incluya la participación activa de todos los actores involucrados en materia de sanidad agropecuaria y bienestar animal, se atentaría no solo contra las granjas productoras de proteína animal, sino contra la economía de las familias del DMQ.

- **Necesidad de Reformar el Título V, Libro IV.3 del Código Municipal, reformado por la Ordenanza Metropolitana No. 019-2020**

Quito es la capital del Ecuador y, por tanto, un referente para otras municipalidades del país. Resulta un precedente negativo y un peligro inminente para el sector productor de proteína animal, que los 221 gobiernos autónomos descentralizados municipales y 24 provinciales del

país, de manera desarticulada e insubordinada, promulguen sus propias normativas sobre «fauna urbana» desconociendo las competencias y atribuciones de la Autoridad Agraria Nacional.

Para efectos de justificar la eliminación de la Sección XII, De los Animales Destinados al Consumo, del Capítulo II De la Protección de la Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, del Título VI Del Bienestar Animal, artículos 3678, 3679, 3680 y 3681, se deben considerar los siguientes puntos:

- a.** El sector productivo formal cumple con regulaciones internacionales respecto al bienestar animal. Este debe ser comprendido desde una esfera técnica y científica, sin dejar que criterios subjetivos se impongan a través de la normativa.
- b.** El Ecuador es miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal y se debe respetar la prevalencia de sus recomendaciones de la Organización de Sanidad Animal- OIE por tratarse de un tratado internacional.
- c.** Analizar de manera técnica y objetiva las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de alojamiento de animales.
- d.** Impacto económico, social de una normativa alejada a la realidad propia del país. Considerable afectación al empleo en el Distrito Metropolitano de Quito y en el país.
- e.** La Corte Constitucional ha reconocido que los seres humanos tienen la necesidad de alimentarse y para el efecto necesitan proteína animal. El aprovechamiento de los recursos naturales para satisfacer necesidades alimenticias es legítimo.
- f.** La desnutrición crónica infantil es una preocupante realidad que no puede ser desatendida por las autoridades del país.
- g.** La regulación de aspectos técnicos sin considerar los impactos económicos deviene en el incremento de costos y afectación al consumidor final.
- h.** Se debe respetar el derecho del consumidor a elegir.

Adjunto como Anexo 2 a la exposición de motivos, el Análisis Económico – Sector Proteína Animal.

ANEXO 2

ANÁLISIS ECONÓMICO – SECTOR PROTEÍNA ANIMAL

En Ecuador, la cadena productiva de la proteína animal (avicultura y porcicultura) es de gran importancia pues alcanza una oferta total de USD. 5.453 millones de dólares (26% del PIB Agropecuario). El empleo directo generado por la cadena alcanza 330 mil personas.

La cadena productiva de la proteína animal contempla tres eslabones: el primero, la actividad pecuaria, que consiste en la cría de ganado porcino y de pollos; el segundo, la producción de alimento balanceado preparados para animales, que utiliza como uno de sus principales insumos el maíz amarillo duro; el tercero, los cultivos de maíz amarillo y el grano de soya. Esta cadena de valor representa la principal fuente de proteína para el consumidor ecuatoriano.

Tabla 1: Resumen de la cadena productiva de la proteína animal en 2023

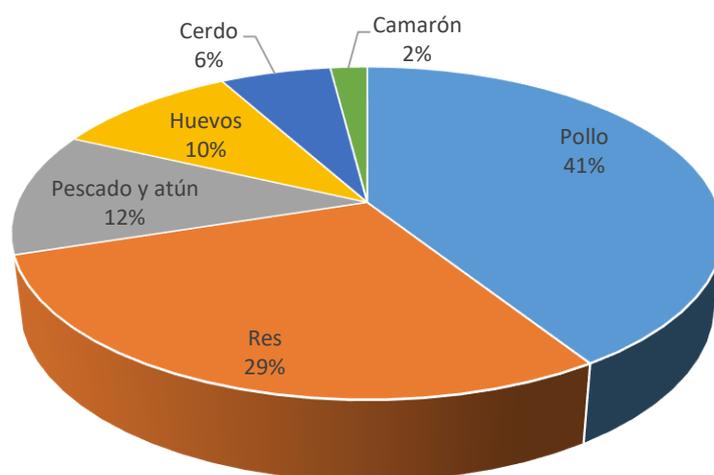
	Eslabón pecuario (pollo)	Eslabón pecuario (cerdo)	Eslabón industrial	Eslabón Agrícola	TOTAL
Tamaño de la oferta (USD millones)	1.971	622	2.067 **	752**	5.453
Empleo (personas)	33.000	80.000*	10.000	207.000	324.542

Fuente: Estimados propios en base a datos CONAVE, ASPE y APROBAL.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) de los años 2011-2012, el consumo de proteínas de pollo representa 8,8% del gasto corriente en alimentos y bebidas no alcohólicas. Siguen: el consumo de res con 6,3% del total, pescado y atún con 2,5%, huevos 2,3%, cerdo con 1,3% y camarón con 0,5%.

Dentro de la proteína animal, el pollo representa la mayor parte del consumo con 40,6% del total (8,8% del gasto total en alimentos y bebidas), seguido por la carne de res con 29,1% y el pescado y atún con 11,6%.

Ilustración 1: Gasto de consumo en proteína animal



Fuente: INEC, ENIGHUR 2001-2012

Elaboración: Grupo Spurrier

El consumo total de proteína animal representa una proporción importante del gasto corriente en alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzando el 21,8% del total, equivalente a USD. \$127 millones de dólares mensuales en el año 2012. Siendo así, la proteína animal constituye un componente esencial dentro de la dieta de la población y hace que sea un factor socialmente sensible ante la variación de precios.

Tabla 2: Ecuador. Consumo per cápita de proteína animal proveniente de la cadena avícola y porcícola para el 2023

Producto	Consumo per cápita 2020
Carne de pollo	30 Kg
Huevos de mesa	200 huevos/13 Kg
Carne de pavo	1 Kg
Carne de cerdo	11 Kg
Total	55 Kg

Fuente: CONAVE, 2023. ASPE, 2023.

Según la tabla anterior, los ecuatorianos consumen 55 Kg de proteína de origen animal que provienen de la cadena agroalimentaria de la avicultura y porcicultura. Esta ingesta representa el 78% de la ingesta total de proteína de un ecuatoriano al año, misma que no contempla la carne de res, leche de vaca, mariscos y pescado, entre otros.

Cadena agroalimentaria de proteína animal:

La cadena agroalimentaria de proteína animal absorbe en promedio al año, 1 millón de toneladas de maíz amarillo nacional y 30 mil toneladas de soya en grano. Estas materias primas son transformadas en más de 2.900.000 toneladas de alimento balanceado en promedio para la

producción de carne de pollo, huevos, carne de pavo y carne de cerdo. A continuación, se muestra la producción histórica por eslabón:

Tabla 3: Cadena agroalimentaria de proteína animal. Producción por eslabón

Producto	2019	2020	2021	2022	2023
Carne pollo (Toneladas) ²	528.799	495.732	480.357	495.002	549.423
Carne de pavo (Toneladas) ²	15.689	12.485	15.574	18.587	18.610
Huevos (millones de unidades) ²	3.944	3.436.220.569	3.507.750.984	3.812.115.115	3.644.001.819
Maíz (Toneladas) ¹	1.801.766	1.430.608	1.765.294	1.806.819	1.849.501
Soya (Toneladas) ¹	32.506	20.415	20.077	29.454	28.000
Balanceados (Toneladas) ²	2.338.931	2.745.000	3.083.000	3.181.000	2.953.042
Cerdos (Toneladas) ³	187.295	193.023	202.675	206.213	213.588

Fuentes: ¹ MAG, 2023

²CONAVE, 2023

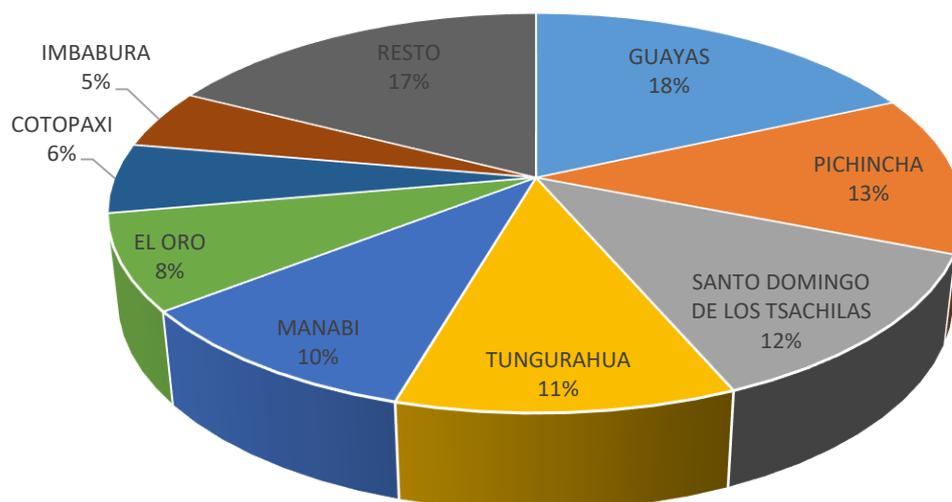
³ASPE, 2023

Los procesos de producción de proteína animal se encuentran regulados por las instituciones de control Zoosanitario (AGROCALIDAD) y productivo (MAG); todos bajo los parámetros que define la Ley y que garantizan el uso de buenas prácticas agropecuarias, así como productos de calidad a precios accesibles para el consumidor.

La producción avícola del país se realiza en más de 1.800 granjas a nivel nacional de todas las líneas de producción: carne de pollo, huevo de mesa y reproductoras livianas y pesadas. El sector creció entre el año 2006 al 2015 en 42% a nivel nacional, pasando de una capacidad instalada total de 40,4 millones de aves a 57,4 millones.

En cuanto a la participación por provincia, el Registro Nacional Avícola del 2015 reporta que Pichincha es la segunda provincia a nivel nacional con mayor población de aves, representado el 13% del total nacional y solamente superada por Guayas que representa el 18%. Según esta misma fuente, en Pichincha el Distrito Metropolitano de Quito concentra más del 51% de aves en producción.

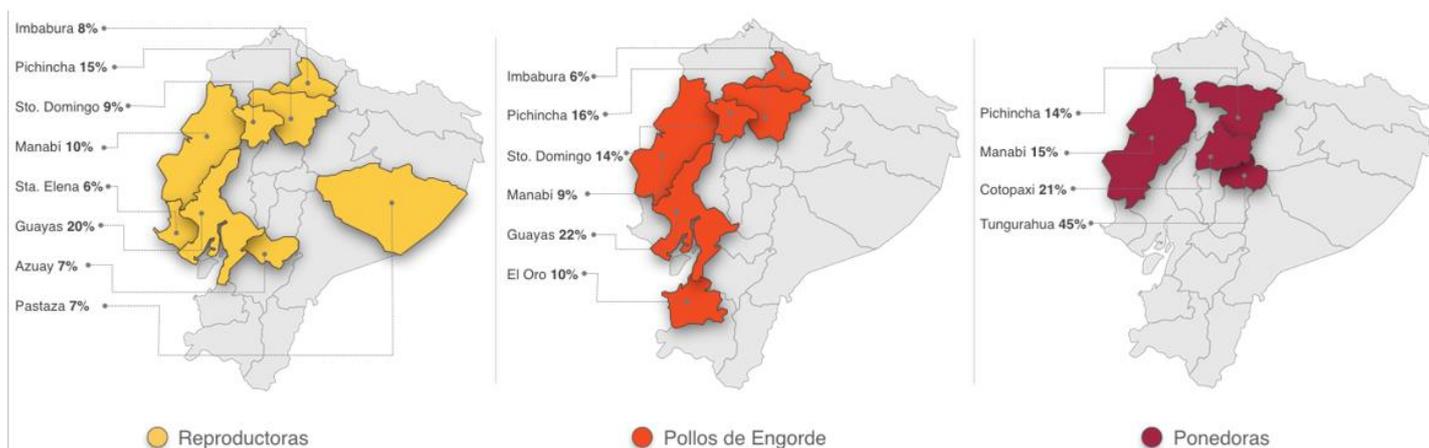
Ilustración 2: Población avícola por provincia. Porcentaje de participación



Fuente: Registro Nacional Avícola, 2015.

Por número de granjas, Pichincha representa el 15% de granjas de reproducción, 16% de granjas para pollo de engorde y 14% de granjas para la crianza de gallinas ponedoras.

Ilustración 3: Distribución de granjas avícolas a nivel nacional



Fuente: Registro Nacional Avícola, 2015

En cuanto a producción avícola, la provincia de Pichincha produce el 13% de carne de pollo a nivel nacional y el 14% de la producción de huevos. El Distrito Metropolitano de Quito representa el 42% y 91%, respectivamente.

Producción avícola en el Distrito Metropolitano de Quito

Dentro del DMQ, existen más 140 granjas dedicadas a la crianza de aves para el consumo y la producción de huevos; además, en la ciudad se encuentran varios de los centros de procesamiento industrial de alimento más importantes del país, que abastece y distribuye productos a más de 6 millones de consumidores. A continuación, se muestra la capacidad instalada para la producción avícola por cantón de Pichincha.

Tabla 4: Capacidad instalada en Pichincha para la producción de aves y cerdos por cantón

Cantón	Capacidad instalada de ponedoras	Capacidad instalada de pollos de engorde
Cayambe		582.500
Distrito Metropolitano de Quito	1.501.220	2.243.500
Mejía		147.408
Pedro Moncayo	110.260	779.900
Pedro Vicente Maldonado		913.100
Puerto Quito		141.000
San Miguel de Los Bancos		548.000
Total	1.611.480	5.355.408

Fuente: MAG, 2015

Por lo tanto, el DMQ produce 80.000 TM de proteína animal, que representan USD. \$300 millones de dólares anuales, además de promover para esta producción el consumo de 120.000 TM de materias primas como maíz amarillo duro, las cuales provienen de las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas y Loja, representando un valor de USD. \$ 42 millones de dólares al año y 5.000 agricultores involucrados en el cultivo de estos productos.

A nivel de ventas, el sector de proteína que tiene como sede tributaria Quito, representó en 2022 más de USD. \$1.900 millones de dólares en ventas, considerando que desde el 2020 los sectores se están recuperando. Este sector mantuvo su producción para precautelar la seguridad alimentaria, los empleos generados, los precios se mantienen estables, lo que reafirma el compromiso de los actores por alimentar al Ecuador.

Tabla 5: Ventas del sector de proteína animal en el Distrito Metropolitano de Quito (USD)

CIU	Descripción	2020	2021	2022
A014501	Cría y reproducción de cerdos	39.652.427	46.515.370	53.573.159
A014601	Criaderos de pollos y reproducción de aves	765.576.216	867.170.601	1.022.733.367
A014603	Producción de huevos de aves de corral	37.318.171	46.387.881	62.049.693
C101011	Procesamiento de bobino, porcino, ovino, caprino	41.196.328	49.923.727	59.011.781
C101012	Procesamiento de aves de corral	149.184.531	160.938.475	168.310.930
C108002	Fabricación de alimentos preparados para animales de granja	903.191.563	1.190.708.915	1.571.019.970
	Total	1.936.119.236	2.361.644.969	2.936.698.901

Fuente: SRI, 2024.

Un impacto exógeno sobre los requisitos y parámetros de producción en esta actividad, tendría un efecto inmediato, promoviendo que el productor suspenda el funcionamiento de las granjas dedicadas a la crianza de animales para el consumo, lo que consecuentemente llevaría a una pérdida de empleos, desabastecimiento de producto, incremento de precio y suspensión de inversiones productivas en la ciudad.

Conclusiones Económicas:

- La producción de proteína genera un encadenamiento vertical que va desde el cultivo de maíz, la industria del balanceado y la producción de productos finales esenciales en la canasta básica del consumidor ecuatoriano. Una afectación sobre la estructura de costos de las empresas se trasladaría de manera directa sobre el producto final, es decir sobre el consumidor y su demanda.
- Los procesos para la producción de proteína animal ya son controlados por la autoridad competente (AGROCALIDAD) bajo los parámetros que garanticen la inocuidad de los alimentos. Los cambios sobre estos los parámetros de producción deben ser producto del incremento de la demanda del consumidor y requerirían de una adecuada planificación y de importantes inversiones que solo pueden amortizarse en el tiempo pues implican la reingeniería de procesos y uso de espacio físico.
- La implementación de los parámetros de producción para animales producidos para el consumo definidos en la Ordenanza 019-2020 son inviables económica y financieramente para el sector productivo domiciliado en el DMQ, generando 3 efectos inmediatos: la suspensión de las actividades, pérdida de empleos y un eventual desabastecimiento de proteína animal en la ciudad. En el mediano plazo se desincentiva la inversión en la ciudad y el efecto precio se mantendría producto de abastecimiento de zonas aledañas con un mayor costo de transporte y logística afectando al ingreso familiar de los ciudadanos y buscando sustitutos de la producción local.

CONSIDERANDO:

- Que, la Constitución de la República del Ecuador, en adelante “Constitución”, en su artículo 1, define al Ecuador como *“un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. (...)”*;
- Que, el artículo 3 de la Constitución establece entre los deberes primordiales del Estado: *“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución (...) 7. **Proteger el patrimonio natural y cultural del país**”* (énfasis añadido);
- Que, la Constitución en su artículo 21 determina que *“**Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. (...)”*** (énfasis añadido);
- Que, el artículo 22 de la Carta Suprema dispone que *“**Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.**”*;
- Que, el artículo 23 de la Constitución tipifica que *“Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.”*;
- Que, el artículo 24 de la Constitución señala que *“Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, (...)”*;
- Que, la Constitución, en su artículo 31, establece que *“Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas **y equilibrio entre lo urbano y lo rural**. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de*

la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”
(énfasis añadido);

Que, el artículo 66 de la Constitución, en su número 24, reconoce y garantizará a las personas: *“24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.”*;

Que, la Constitución en su artículo 82 garantiza el derecho a la seguridad jurídica, misma que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;

Que, el artículo 226 de la Constitución establece que las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, tendrán el deber de coordinar las acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 238 de la Constitución, establece que: *“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales”*;

Que, el artículo 240 de la Constitución indica que: *“Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. (...)”*;

Que, el artículo 261 de la constitución, estable las competencias exclusivas del Estado central, entre otras:

“9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales.”;

Que, la Constitución, en su artículo 264, número 8, dispone: **“8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines”**;

Que, la Constitución, en el artículo 266, determina que: *“Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas*

las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias.”;

Que, el artículo 275 de la Constitución señala que *“El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, **socio-culturales** y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. (...);*

Que, el artículo 377 de la Norma Suprema dispone que *“El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.”;*

Que, el artículo 424 de la Carta Magna, determina que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica (...);

Que, la Constitución, en su artículo 425, determina:

*“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: **La Constitución; los tratados y convenios internacionales;** las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; **las ordenanzas;** los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.*

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.” (énfasis añadido);

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en adelante “COOTAD”, en su artículo 3 dispone los siguiente: *“Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: (...) h) Sustentabilidad del desarrollo.- **Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales***

para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país.”;

Que, el COOTAD, en su artículo 64, letra i), establece que son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, entre otras, ***“i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad;***”;

Que, el COOTAD, en su artículo 86, manifiesta que: *“El concejo metropolitano es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado del distrito metropolitano. Estará integrado por los concejales o concejales elegidos por votación popular de conformidad con previsto en la Ley de la materia electoral. El alcalde o alcaldesa metropolitana lo presidirá con voto dirimente.”*;

Que, la letra a), del artículo 87 del COOTAD, establece como atribución del Concejo Metropolitano: *“a) Ejercer la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado metropolitano, mediante la expedición de ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones; (...)”*;

Que, la letra b) del artículo 88 del COOTAD, establece como atribución de los concejales o concejales metropolitanas, entre otras, *“b) La presentación de proyectos de ordenanzas distritales, en el ámbito de competencia del gobierno del distrito metropolitano autónomo”*;

Que, Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, en adelante “LOSA”, en su artículo dispone:

“De la regulación y control. - Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional.

A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria.” (énfasis añadido);

Que, el artículo 48 *ibidem* señala: *“Del bienestar animal. - Las disposiciones relativas al bienestar animal, observarán los*

estándares establecidos en la Ley de la materia y en los instrumentos internacionales.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario reglamentará y controlará los estándares de bienestar animal en las explotaciones productivas pecuarias industriales destinadas al mercado de consumo, tomando en consideración las necesidades que deben ser satisfechas a todo animal, como no sufrir: hambre, sed, malestar físico, dolor, heridas, enfermedades, miedo, angustia y que puedan manifestar su comportamiento natural.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario regulará la utilización de animales para actividades de investigación, educación, recreación o actividades culturales.”;

Que, el TITULO VI DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO CAPITULO I DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA, de la LOSA, en su artículo 66, tipifica:

“De la jurisdicción y competencia administrativa. - La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario tendrá la competencia y jurisdicción para conocer y resolver en el territorio nacional, en la vía administrativa, las solicitudes, reclamos, recursos o cualquier otra acción administrativa que interpusieren los administrados cuando se sintieren afectados por un acto o hecho administrativo, que derive de la aplicación de la presente Ley.

La Agencia, en ejercicio de la potestad estatal, tendrá, además, la facultad sancionatoria, en sede administrativa, respecto de las infracciones que expresamente se determinan en esta normativa.”;

Que, el artículo 143 de la LOSA, dispone en el número 1, lo siguiente: *“Art. 143.- De la rectoría del Gobierno Central en el Manejo de Fauna Urbana. - Para efectos del manejo de la fauna urbana se deberá considerar los siguientes lineamientos y normas técnicas:*

1. Las emitidas por el Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca sobre el bienestar de los animales destinados al consumo, en toda la cadena de producción, para procurar la inocuidad y calidad de los productos que llegan al consumidor, así como el bienestar de los animales destinados, trabajo u oficio, de conformidad con las normas de la materia;” (...);

Que, Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito señala en su artículo 67.53, lo siguiente: *“Iniciativa de las y los concejales. - Las y los concejales tienen iniciativa para presentar proyectos de ordenanzas en las materias de competencia de los gobiernos*

autónomos descentralizados, con excepción de temas tributarios, cuya competencia exclusiva es del alcalde o alcaldesa.

Que, el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, aprobó la “Ordenanza Metropolitana de Bienestar Animal en el Distrito Metropolitano de Quito, Sustitutiva del Título VI, Libro IV.3, de la Ordenanza Metropolitana No. 001 sancionada el 29 de marzo de 2019, que expide el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito”, No, 019-2020, sancionada el 05 de enero de 2021; y,

En ejercicio de las atribuciones que confieren el primer inciso del artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador; letra a) del artículo 87; primer inciso del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, el número 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, expide la siguiente:

**ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA AL TITULO VI,
LIBRO IV.3, (REFORMADA POR LA ORDENANZA METROPOLITANA
No. 019-2020 DE 05 DE ENERO DE 2021) DE LA ORDENANZA
METROPOLITANA No. 001 DE 29 DE MARZO DE 2019 QUE
CONTIENE EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO.**

Artículo 1.- En el artículo 3603, efectúense las siguientes reformas:

a. Agréguese a continuación del primer inciso, el siguiente:

“Se exceptúan del objeto del presente Título, las corridas de toros populares, sin muerte del animal, en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, las que son parte del patrimonio histórico-cultural, tradiciones, costumbres centenarias e identidad de la ruralidad”;

b. En el segundo inciso, a continuación de las palabras: “Distrito Metropolitano de Quito”, agréguese las siguientes: “en zonas urbanas consolidadas”; y,

c. Añádase como último inciso, el siguiente texto:

“Se excluye expresamente la fauna de las zonas rurales de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, cuyos animales son destinados a las actividades propias de la ruralidad, teniendo en consideración su realidad socio-económica, así como también sus tradiciones, costumbres centenarias e identidad de la ruralidad, que son parte del patrimonio histórico-cultural”.

Artículo 2.- En el artículo 3604, letra e), a continuación del punto final, añádase el siguiente texto:

“Se exceptúa de este principio, el presunto impacto o daño producto de las actividades propias de la ruralidad, teniendo en consideración su realidad socio-económica, así como también sus tradiciones, costumbres centenarias e identidad de la ruralidad, que son parte del patrimonio histórico-cultural”;

Artículo 3.- En el artículo 3605, efectúense las siguientes reformas:

- a. En el número 13, eliminado el punto final, añádase el siguiente texto:

“y/o que participen en actividades propias de la ruralidad, teniendo en consideración su realidad socio-económica, así como también sus tradiciones, costumbres centenarias e identidad de la ruralidad, de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, que son parte de su patrimonio histórico-cultural.”;

- b. En el número 34, a continuación de las palabras: “áreas verdes”, inclúyase las siguiente; “en zonas urbanas consolidadas”; y,

- c. Añádase como número 67, el siguiente texto:

“Zonas urbanas consolidadas: *Se define como zonas urbanas consolidada las que poseen la totalidad de servicios, equipamientos e infraestructura necesaria y que mayoritariamente se encuentran ocupadas por edificación.”*

Artículo 4.- En el artículo 3607, incluir como inciso segundo del número 5, luego de reemplazar el punto y coma (;), por un punto y aparte, el siguiente texto:

“A este efecto, no se considerará animales de compañía el ganado vacuno criado en los páramos de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, destinado desde su crianza como ganado para las corridas de toros populares y que además son parte de la economía propia de la ruralidad; y,”

Artículo 5.- En el artículo 3608, número 18, agregar el siguiente texto:

“considerando lo dispuesto en la letra e) inciso segundo del artículo 3607 de este Código;”

Artículo 6.- En el artículo 3648, agregar como segundo inciso el siguiente texto:

“A este efecto se considerará lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 3603 de este Código.”

Artículo 7.- En el artículo 3650, añádase a continuación de inciso segundo, el siguiente:

“Se exceptúan las corridas de toros populares, en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, las que son parte del patrimonio histórico-cultural, tradiciones, costumbres centenarias e identidad de la ruralidad, de conformidad a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 3603 de este Código.”

Artículo 8.- Elimínese la Sección XII De los Animales Destinados al Consumo, del Capítulo II De la Protección de la Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, del Título VI Del Bienestar Animal, artículos 3678, 3679, 3680 y 3681.

Disposiciones generales

Primera. - Encárguese de la promoción de los festivales que tienen relación a las tradiciones y costumbres ancestrales de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, en coordinación con las Juntas Parroquiales, a la Secretaría de Comunicación del Municipio de Distrito Metropolitano, en los medios de comunicación institucionales.

Segunda. - El Instituto Metropolitano de Patrimonio levantará un Registro Histórico de las Festividades de las Tradiciones y Costumbres Centenarias e Identitarias de la ruralidad, en el Distrito Metropolitano de Quito, en particular, las relacionadas a las corridas de toros populares, a efecto de ser difundido como parte del patrimonio cultural intangible de Quito.

Artículo final. La presente ordenanza metropolitana reformativa, entrará en vigencia a partir de su sanción.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano a los ...